



# ESPAÑA

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE  
DE ESPAÑA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

EXCMO. SEÑOR JUAN PABLO DE LAIGLESIA

EN EL DÉCIMO PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE ESTADOS  
PARTES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Nueva York, 14 de diciembre de 2011

(Cotejar con intervención definitiva)

---

STATEMENT BY THE AMBASSADOR  
PERMANENT REPRESENTATIVE OF SPAIN  
TO THE UNITED NATIONS

HE MR. JUAN PABLO DE LA IGLESIA

AT THE TENTH SESSION OF THE ASSEMBLY OF STATES PARTIES OF THE  
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

New York, 14 December 2011

(Unofficial translation, check against delivery)

Sra. Presidenta,

Permítame en primer lugar felicitarle por su nombramiento como Presidenta de la Asamblea de Estados Partes y transmitirle mi confianza en que, bajo su dirección, la Asamblea lleve a cabo sus trabajos de forma eficaz, teniendo siempre presentes las necesidades de la Corte y el consenso de los Estados Partes. Permítame asimismo expresar el sincero reconocimiento de España a la labor de su predecesor, Embajador Wenaweser, con quien mi país ha colaborado estrechamente en la Mesa durante los tres últimos años.

Quiero también felicitar a los nuevos Vicepresidentes de la Asamblea y a los nuevos miembros de la Mesa. Además, este décimo período de sesiones será recordado por haber sido el de la elección de seis nuevos jueces y de la Fiscal de la Corte. Deseo dar la enhorabuena a todos ellos, al tiempo que agradezco a los seis jueces salientes la tarea realizada, y al primer Fiscal de la Corte, Sr. Moreno Ocampo, el importante trabajo fundacional desempeñado durante estos primeros nueve años al frente de la Fiscalía.

Sra. Presidenta,

Uno de los rasgos más destacables del último año ha sido el aumento en el número de las situaciones de que se ocupa la Corte, siete en la actualidad, tras la remisión de la situación en Libia por parte del Consejo de Seguridad, y la autorización al Fiscal para investigar la situación en Costa de Marfil. Ello muestra la necesidad de la comunidad internacional de contar con una institución como la Corte. También da fe de la actualidad de su misión, así como de su vitalidad como organización al servicio de la justicia penal internacional. Si esta labor de iniciación es clave, no lo es menos la que tiene que ver con los resultados de la actividad judicial. La Corte no tardará mucho en dar a conocer su primera sentencia, momento que la comunidad internacional aguarda expectante, por su relevancia en la historia de la institución y de la justicia penal internacional. Esperamos vivamente que dicha sentencia esté a la altura de la misión de la Corte, que no es otra que poner fin a la impunidad de los crímenes internacionales de mayor gravedad a través de un juicio justo. No debemos olvidar, por otro lado, la justicia que la Corte está llamada a dispensar a las víctimas de los crímenes de su competencia. La labor, actual y futura, en materia de reparaciones a las víctimas será también uno de los parámetros que servirán para comprender mejor y evaluar el papel de la Corte en la comunidad internacional.

La reflexión en torno a la misión de la Corte lleva inevitablemente a tomar en consideración los recursos de que dispone para cumplirla. La actual coyuntura económica y financiera obliga a adoptar decisiones responsables, informadas, y quizá difíciles, en materia presupuestaria. Es hora de redoblar los esfuerzos en pos de una mayor eficiencia en la utilización de los recursos por parte de la Corte, eliminando el gasto no eficiente y desarrollando modos de gestión que optimicen la relación entre coste y resultados. La austeridad presupuestaria, sin embargo, no debe llevar a que la Corte carezca de los medios necesarios para cumplir con su misión conforme al mandato del

Estatuto de Roma. Teniendo presentes estos imperativos, España es partidaria de un presupuesto lo más limitado posible para el año 2012. Nuestra función como Estados Partes en esta Asamblea es terminar de identificar aquellas partidas presupuestarias que pueden reducirse sin menoscabo de la misión judicial de la Corte, trabajando a favor del consenso en esta tarea crucial. La salud institucional de la Corte depende en buena medida de cómo afrontemos este reto.

Sra. Presidenta,

La cooperación es otro ámbito esencial para que la Corte desarrolle la función que le atribuye el Estatuto. Un índice del buen funcionamiento del sistema diseñado en Roma es el hecho de que, en general, los Estados Partes y las organizaciones internacionales cooperen adecuadamente con la Corte en las diversas fases del proceso penal, además de prestarle apoyo político y diplomático en diversos foros internacionales. La necesaria mejora en materia de cooperación pasa por la ejecución de todas las órdenes de arresto presentes y futuras, y por el mantenimiento de canales regulares de información y contacto con la Corte. Resulta paradójico que todavía haya Estados partes que incumplan sus obligaciones de cooperación con la Corte obstaculizando el cumplimiento de su mandato. La comunidad internacional debe realizar todos los esfuerzos políticos y diplomáticos necesarios para evitar que tales situaciones se prolonguen o se repitan en el futuro. En esta línea argumental, tras casi una década en vigor, el sistema del Estatuto de Roma ha madurado lo suficiente como para que la Asamblea de Estados Partes adopte una serie de procedimientos formales para reaccionar ante los casos de no cooperación con la Corte.

Estos últimos meses la Corte ha despejado algunas incógnitas en una cuestión tan relevante como la de sus locales permanentes. España considera que la institución capital en el sistema de justicia penal internacional debe tener una sede física que refleje la importancia de su papel en la comunidad internacional. La imagen pública de la Corte es un factor no desdeñable en el modo en que ésta cumple su misión. Por otro lado, es preciso garantizar que la Corte pueda trabajar con eficiencia, dotándola de unos locales permanentes más funcionales que el complejo de edificios que actualmente constituye su sede provisional. En este sentido, quiero recordar que nuestra responsabilidad es hacer todos los esfuerzos necesarios para que la nueva sede permanente esté a disposición de la Corte lo antes posible dentro de los plazos previstos formalmente.

Sra. Presidenta,

Desde la creación de la Corte en 1998, España ha sido consciente de la importancia de la universalidad del Estatuto de Roma. La efectividad de este sistema de justicia penal se basa en gran medida en la participación más amplia posible de los Estados de la comunidad internacional. Por ello celebro que, desde el anterior período de sesiones de la Asamblea, seis nuevos Estados hayan decidido participar plenamente en dicho sistema. Quiero felicitar cordialmente a Granada, Túnez, Filipinas, Maldivas, Cabo Verde y Vanuatu por

haber ratificado o haberse adherido al Estatuto de Roma, elevando a 120 el número de Estados Partes. Esta cifra, alcanzada en poco más de una década y que constituye el doble del número de ratificaciones requerido para la entrada en vigor del Estatuto, demuestra que los valores que dan fundamento a la Corte gozan de una cada vez mayor aceptación en la comunidad internacional, que la universalidad del Estatuto de Roma es un proyecto creíble y un reto necesario, y que la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes internacionales goza de un activo y creciente apoyo político. Con la confianza que da formar un grupo de 120 Estados, es buen momento para refinar la estrategia de la Corte en materia de universalidad, aprovechando las lecciones aprendidas y generando nuevos métodos e ideas para avanzar en este terreno.

Las elecciones que acabamos de celebrar nos han recordado que una de las claves del éxito de cualquier institución es el acierto en la renovación de sus miembros. Para proceder a dicha renovación, la Corte Penal Internacional se ha ido dotando de una serie de procedimientos y mecanismos que paulatinamente han aumentado las posibilidades de acierto de los Estados Partes en esta tarea. El Comité Asesor para las candidaturas de los jueces, previsto en el artículo 36 del Estatuto, es una pieza más en esta estructura de normas y procesos. Su existencia y funcionamiento ayudarán a los Estados Partes a lograr un objetivo esencial: que resulten elegidas como jueces personas con el más alto grado de cualificación técnico-jurídica. La labor de la Mesa y del Grupo de Trabajo de Nueva York en este ámbito ha sido eficaz e importante, por lo que, a juicio de España, la Asamblea de Estados partes dará un significativo paso adelante con el establecimiento efectivo de este Comité Asesor.

Sra. Presidenta,

Permítame terminar mi intervención reiterando solemnemente el apoyo de España a la Corte Penal Internacional, su interés en un funcionamiento cada vez más eficaz de esta institución, y su compromiso con los valores que representa el Estatuto de Roma, que forma ya parte del patrimonio jurídico y moral de las generaciones presentes y futuras.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

Ms. President,

Let me start by congratulating you on your election as President of the Assembly of States parties and convey to you my confidence that, under your able chairmanship, the Assembly will carry out its work in an efficient manner, always taking into account both the needs of the Court and the consensus among the States parties. Allow me as well to express the most sincere appreciation of Spain to the work of your predecessor, Ambassador Wenaweser, with whom my country has had the honour to cooperate very closely in the Bureau during the last three years.

I would also like to congratulate the new Vice-Presidents of the Assembly, and the new members of the Bureau. Moreover, this tenth session of the ASP will be remembered for the election of six new judges and the chief Prosecutor of the Court. I extend my congratulations to them all, and I send my appreciation to the outgoing judges for their work, as well as to the first ICC Prosecutor, Mr. Luis Moreno-Ocampo, for the important foundation work developed during this nine years as head of the Office of the Prosecutor.

Ms. President,

One of the most remarkable facts of the last year has been the increase in the number of the situations the Court is dealing with, seven at this moment, after the remission of the situation in Libya by the Security Council, and the authorization given to the Prosecutor to investigate the situation in Ivory Coast. This shows the need for the international community to count on an institution such as the Court. It proves as well the pertinence of its mandate, and its vitality as an organization at the service of international criminal justice. This pre-trial work being of the essence, the work dealing with the outcome of the judicial activity is as relevant. The first judgement of the Court will be delivered shortly, and is being awaited with great anticipation by the international community, given its importance in the history both of the institution itself and of international criminal justice. We truly hope that this judgement rises to the importance of the mission of the Court, which is no other than putting an end to the impunity of the most serious international crimes through a fair trial. On the other hand, we cannot forget the fact that the Court has to deliver justice to the victims of the crimes under its jurisdiction. The present and future work of the Court regarding reparation to victims, will set one of the criteria to better understand and assess the role of the Court in the international community.

Reflecting upon the mandate of the Court inevitably leads to taking into consideration the resources it has in order to fulfil such a mandate. The present economic and financial situation requires the adoption of responsible, informed and, perhaps difficult, decisions on budgetary matters. The time has come for the Court to double the efforts to increase efficiency in the use of its resources, removing inefficient expenditure and developing management methods to optimise the relationship between cost and results. Nevertheless, budgetary austerity cannot result in the Court lacking the necessary means to carry out its mission in accordance with the mandate set out by the Rome Statute. All these constraints considered, Spain favours a 2012 budget as limited as possible. As

States parties in this Assembly, our task is to identify those budgetary chapters that can be cut without impairing the judicial mission of the Court, and we have to achieve this by reaching a consensus. The institutional health of the Court depends in great measure on how we face this challenge.

Ms. President,

Cooperation is another fundamental issue for the Court to carry out the function conferred upon it by the Rome Statute. A measure of the good functioning of the system designed in Rome is the fact that, in general, States parties and international organizations cooperate adequately with the Court along the different stages of the criminal proceedings, also providing the Court with political and diplomatic support in various international fora. The necessary improvement in cooperation issues requires the execution of all outstanding and future arrest warrants, as well as keeping regular channels for information and contact with the Court. It is paradoxical that there are still some States parties that breach their legal obligations to cooperate with the Court, thus obstructing the fulfilment of its mandate. The international community should make all necessary political and diplomatic efforts to prevent these situations from continuing or recurring in the future. In this line of thought, after almost one decade in force, the system of the Rome Statute is mature enough for the Assembly of States parties to adopt a series of formal procedures to be applied in cases of non-cooperation with the Court.

During these past months, the Court has cleared up some uncertainties regarding the important issue of its permanent premises. Spain considers that the most prominent institution in the system of international criminal justice must have a seat that reflects the relevance of its role in the international community. The Court's public image is a non-negligible element in the way the ICC carries out its mission. On the other hand, it is necessary to ensure that the Court can work in an efficient manner, providing it with permanent premises that are more functional than the building complex where it sits at present. In this regard, I would like to recall our responsibility in making all necessary efforts for the new permanent premises to be available to the Court as soon as possible within the foreseen formal deadlines.

Ms. President,

Since the establishment of the Court, back in 1998, Spain has been aware of the importance of the universality of the Rome Statute. The effectiveness of this system of criminal justice is mainly based on the widest possible participation of the States of the international community. That is why my delegation welcomes the fact that, since the last session of the Assembly, six new States have decided to fully take part in such system. I would like to cordially congratulate Grenada, Tunisia, the Philippines, Maldives, Cape Verde and Vanuatu for having ratified or acceded to the Rome Statute, raising the number of States parties to 120. This number has been reached in little more than a decade and doubles the minimum required for the entry into force of the Statute, thus proving that the founding values of the Court are being increasingly accepted by the international community, that the universality of

the Rome Statute is a viable project and a necessary challenge, and that the fight against impunity of the most serious international crimes enjoys an active and growing political support. With the confidence of belonging to a group that is 120-strong, I consider that this is a good moment to refine the Court's strategy regarding universality, benefiting from lessons learned and developing new ideas and methods to progress in this area.

The elections we just held have reminded us that the success of any institution depends largely on making wise decisions concerning the renewal of its members. In order to perform this task, the International Criminal Court has provided itself with a set of procedures and mechanisms that, progressively, have increased the chances of making the right choices in this regard. The Advisory Committee on the nominations of the judges, envisaged in article 36 of the Statute, is another piece in this structure of regulations and procedures. Its very existence and work will assist States parties in attaining an essential goal: to elect judges with the highest technical qualifications. The work of the Bureau and its New York Working Group in this respect has been substantial and effective. It is the view of Spain that the ASP, in establishing the Advisory Committee, will take a significant step forward.

Ms. President,

Allow me to conclude my intervention by reiterating Spain's firm support to the International Criminal Court, her interest in a more effective functioning of the institution and her commitment to the values enshrined in the Rome Statute, which is already a part of the legal and moral heritage of the present and future generations.

I thank you very much, Ms. President.